



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Demandante: LUÍS ALCIDES AGUINAGA ZAPATA
Demandados: POSITIVA S.A., ACP COLPENSIONES, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ
Radicado: 05001 31 05 008 2018 00185 01
Sentencia: S-194

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de Consulta en el que se conoce del proceso, con ocasión de la sentencia absolutoria de primera instancia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de septiembre de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

LUÍS ALCIDES AGUINAGA ZAPATA acude a la vía judicial para que se declare lo siguiente: i) la existencia de una relación laboral con la

señora ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ iniciada en el año 2008 y terminada el 13 de diciembre de 2015; ii) que en el desarrollo de su labor sufrió un accidente que debe ser catalogado como de origen profesional; iii) que fue despedido sin tener en cuenta su estado de debilidad manifiesta; y iv) la nulidad de los dictámenes emitidos por COLPENSIONES y por las juntas de calificación de invalidez. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la señora RESTREPO DÍAZ o a la ARL POSITIVA S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen profesional o la respectiva indemnización sustitutiva de manera retroactiva desde la fecha de ocurrencia de los hechos. De manera SUBSIDIARIA, pretende la pensión de invalidez de origen común a cargo de COLPENSIONES. Pretende, además, que se condene a la señora RESTREPO DÍAZ al pago de la compensación por dotación y a todas las demandadas al pago de las costas del proceso.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que fue contratado para laborar en la Hacienda La UNIÓN de propiedad de la señora ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ, ubicada en el Municipio de Puerto Berrío, a partir del 12 de enero de 2008; que cada año firmaba contrato con la misma empleadora; que durante la relación laboral no le proporcionaron la dotación de trabajo adecuada; que el contrato firmado el 21 de enero de 2013 se renovó hasta el 13 de diciembre de 2015 cuando se le dieron por terminado, momento para el cual no le realizaron exámenes de egreso; que el 26 de marzo de 2011, cuando desempeñaba sus funciones, sufrió un accidente al caerse de una mula, el cual no fue reportado por el empleador; que por los dolores presentados acudió al servicio médico en varias oportunidades; que tiene graves afectaciones en su salud al estar imposibilitado para caminar, hacer ciertos movimientos y valerse por sí mismo; que estuvo incapacitado durante 363 días hasta el 28 de marzo de 2015; que se le definió una pérdida de capacidad laboral de 23.90%; que la

solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez fue negada según Resolución GNR 7038 del 12 de enero de 2017; y que su situación actual de salud no le permite vincularse laboralmente.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, POSITIVA S.A. desconoce el evento que se menciona como accidente de trabajo ya que en su base de datos no existe registro alguno de lo ocurrido. Frente a lo demás señala que no le consta por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento y exclusivas de la relación laboral que se alega. Se opuso a las pretensiones de la demanda al estar plenamente demostrado que la patología que padece el demandante es de origen común. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, enriquecimiento sin causa y prescripción.

COLPENSIONES dice que tampoco le constan los hechos de la demanda por ser ajenos a sus funciones, los cuales deberán ser probados en el curso del proceso. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez, improcedencia de la indexación, descuentos en salud, prescripción, imposibilidad de condena en costas y compensación.

ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ acepta la relación laboral desde el año 2008 pero desconoce su vigencia durante los años subsiguientes, advirtiendo que el contrato terminó por vencimiento del plazo pactado. Desconoce la mayoría de los demás hechos y advierte que otros son apreciaciones infundadas que no tienen ningún respaldo probatorio. Se opuso a las pretensiones por carecer del derecho invocado, proponiendo como excepciones inexistencia de unicidad de la relación laboral, falta de presupuestos materiales, cumplimiento de

inquirido e inexistencia de obligaciones impagadas por parte de la ex – empleadora, falta de legitimación y legalidad en la causa tanto por activa como por pasiva, no agotamiento de los recursos de ley para demandar el acto administrativo de carácter particular, prescripción, entre muchas otras.

La JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA también se ocupó de contestar la demanda aceptando lo relacionado con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido, pero desconociendo lo demás por tratarse de situaciones personales del demandante que deben probarse en el proceso. Se opuso a las pretensiones en tanto la valoración realizada se ciñó estrictamente a lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, con sustento en los antecedentes médicos y clínicos aportados. Como excepción única propuso la que denominó inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

Finalmente, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ señaló que desconoce los hechos de la demanda por referirse a circunstancias que conciernen únicamente al demandante y que solo puede corroborar su empleadora, aceptando únicamente lo que tiene que ver con la calificación realizada. Se opuso a la mayoría de las pretensiones por estar dirigidas a otras personas o entidades, advirtiendo que su dictamen tiene plena legitimidad, validez jurídica y efectos jurídicos, sin que sea jurídicamente viable que se tome una decisión contraria a lo que allí se estableció si no existe una prueba fehaciente, legítima y plena a nivel técnico con similar calidad e idoneidad. Como excepciones propuso legalidad de la calificación expedida, improcedencia del petitum, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, la variación de la condición clínica del paciente con posterioridad al dictamen exime de todo cargo a esta entidad, inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2021, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín decidió ABSOLVER a las entidades demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, frente a quien se abstuvo de imponer costas en virtud del amparo de pobreza previamente concedido.

Conoce la Sala del asunto por **Consulta** a favor del demandante.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de COLPENSIONES se pronunció indicando carecer de legitimación en la causa en razón a que las pretensiones principales van dirigidas en contra de otras personas o entidades, mientras que, en lo que a ella compete, no se cumplen las condiciones para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez en los términos de la Ley 860 de 2003 al no acreditarse una pérdida de capacidad laboral igual o superior a 50%.

En el caso de la demandada ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ, se afirma que las dolencias que aquejan al demandante no pueden atribuirse a una responsabilidad directa o indirecta de la empleadora, más aún cuando nunca fueron reportadas como lo exige la ley. Agrega que según lo decidido por los órganos competentes se ha definido que la afectación del trabajador es de origen común y no se cumplen los porcentajes mínimos requeridos para otorgarle la condición de inválido.

En su caso, POSITIVA S.A. considera que de los hechos y pretensiones de la demanda se vislumbra con toda claridad que la parte demandante lo que persigue es el reconocimiento y pago de prestaciones que han sido asociadas con patologías de origen común,

tal y como se decidió en la sentencia, de manera que no es el Sistema de Riesgos Laborales el obligado a reconocer prestación alguna existiendo falta de legitimación en la causa por pasiva.

En el caso del demandante, los alegatos de conclusión fueron radicados de forma extemporánea, motivo por el cual no serán tenidos en cuenta.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, el señor LUÍS ALCIDES AGUINAGA ZAPATA pretende con la presente acción judicial se profiera la siguiente serie de declaratorias: i) la existencia de una relación laboral con la señora ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ iniciada en el año 2008 y terminada el 13 de diciembre de 2015; ii) que en el desarrollo de su labor sufrió un accidente que debe ser catalogado como de origen profesional; iii) que fue despedido sin tener en cuenta su estado de debilidad manifiesta; y iv) que se anulen los dictámenes emitidos por COLPENSIONES y por las juntas de calificación de invalidez.

Una vez declarado lo anterior, solicita, como pretensiones de condena, que la señora RESTREPO DÍAZ o a la ARL POSITIVA S.A. le reconozcan y paguen la pensión de invalidez de origen profesional o la respectiva indemnización sustitutiva de manera retroactiva desde la fecha de ocurrencia de los hechos. De manera subsidiaria, que COLPENSIONES le reconozca y pague la pensión de invalidez de origen común. Pretende, además, que se condene a la señora RESTREPO DÍAZ al pago de la compensación por dotación y a todas las demandadas al pago de las costas del proceso.

Atendiendo al grado jurisdiccional de CONSULTA en el que se conoce del proceso, corresponderá a la Sala verificar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se absolvió a las

demandadas de todas las pretensiones formuladas en su contra, tanto las declarativas, como las de condena.

1.- De la relación laboral, el supuesto accidente de trabajo y la estabilidad laboral reforzada.

a) Lo primero que se debe advertir, es que el hecho como tal de la existencia de una relación laboral entre el señor LUÍS ALCIDES AGUINAGA ZAPATA y la demandada ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ no es una cuestión que se discuta por la empleadora, además de que de ello dan cuenta documentos tales como el contrato de trabajo a término fijo suscrito el 12 de enero de 2008, mediante el cual se produjo su vinculación como trabajador de la finca La UNIÓN del Municipio de Puerto Berrío (Ant.), o la historia laboral de COLPENSIONES en la que se reportan cotizaciones desde el mes de enero hasta el 14 de diciembre de 2011, así como en los años 2013, 2014 y 2015 hasta el retiro registrado el 14 de diciembre dese año, como fecha final.

De tales situaciones se puede concluir, por lo menos, la existencia de tres relaciones de trabajo que se mantuvieron vigentes, la primera desde el 12 de enero hasta el 20 de diciembre de 2008 según el texto del contrato firmado; la segunda desde enero de 2011 hasta diciembre de 2012; y la tercera desde enero de 2013 hasta el 14 de diciembre de 2015 cuando fue retirado del sistema, lo que de todas maneras, por sí solo, no genera ningún tipo de consecuencia o condena a favor del demandante.

b) De otro lado, no resulta posible declarar que el demandante sufrió un accidente el 26 de marzo de 2011 cuando desempeñaba sus funciones en la finca LA UNIÓN que deba catalogarse como de origen laboral, ya que no existe en el expediente documento alguno que dé cuenta de la existencia de ese hecho, ni reporte en tal sentido presentado por la ARL POSITIVA.

Incluso, la información que registra cada uno de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral que fueron realizados y la historia clínica aportada, dan cuenta de atenciones médicas a partir del año 2012, sin que se tenga noticia de lo ocurrido con anterioridad.

La prueba testimonial allegada al proceso no es tampoco conducente, idónea o útil para el demandante acreditar esa circunstancia; de hecho, no lo es para ningún efecto en tanto se trata de personas que no tuvieron un conocimiento directo de lo ocurrido durante la vigencia de la relación laboral entre las partes, ni tienen conocimientos técnicos, profesionales o especializados para suministrar información o declarar sobre la situación de salud del demandante. Una de ellas es la esposa del propio demandante y el otro un amigo quien fuera compañero de trabajo con anterioridad al año 1997.

c) Tampoco resulta posible establecer la existencia de un estado de debilidad manifiesta, lo que de todas maneras tampoco tendría ninguna consecuencia puntual.

Se dice lo anterior en la medida que la demanda no contiene ninguna pretensión expresa dirigida a obtener el reintegro y/o la indemnización derivada del estado de salud del demandante, de manera que no es posible realizar pronunciamiento alguno en tanto no fue ello parte del objeto del proceso, sumado al hecho de que tampoco fue planteado en los hechos de la demanda, por lo cual es preciso salvaguardar el principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso según el cual *“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que éste código contempla...”*

En cualquier caso, se encuentra que lo resuelto por la juzgadora de primera instancia debe ser confirmado en tanto se constata que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le incumbía con

respecto a detalles indispensables para adoptar una decisión favorable a sus intereses, como lo sería, al menos, el despido o bien la terminación del contrato por decisión unilateral del empleador, sea con justa causa o sin ella.

En tal sentido, es sabido que en el proceso judicial corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que fundamentan sus pretensiones, o sus excepciones, según sea el caso, de acuerdo con los lineamientos normativos que en materia procesal gobiernan el debate probatorio, esto es, el art. 167 del CGP *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*.

Normas en las cuales se plasma lo que se conoce como la carga de la prueba, en cuyo concepto se hace necesario distinguir 2 aspectos: a) de un lado, es una regla para el juez - o regla de juicio - porque le indica cómo debe decidir cuando no encuentra la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su fallo, y b) de otra parte, es una regla de conducta para las partes porque indirecta/ les señala cuáles son los hechos que a c/u de ellas le interesa probar, y puedan ser considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones. De tal manera que si quien tiene interés jurídico en que un hecho resulte probado, no lo logra, debe correr con las consecuencias adversas o desfavorables que ocasione la falta de la prueba.

Sin embargo, no existe en el proceso documento o información alguna relacionada con la terminación del contrato, de modo que no existe prueba a partir de la cual pudiera establecerse con claridad el despido, situación indispensable para poder establecer la eventual vulneración de los derechos de las personas en situación de debilidad manifiesta por su condición de salud.

Ha dicho en reiteradas ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que es necesario que se demuestre inicialmente la ocurrencia del despido para luego determinar la causa que lo produjo y las eventuales consecuencias que de ese hecho se deriven, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la sentencia SL 592 de 2014, reiterada en la SL 7728 de 2016, SL 13260 de 2016 y SL 284 del 14 de febrero de 2018, entre otras.

2.- Nulidad de los dictámenes médicos.

En torno a la declaratoria relacionada con la nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, así como frente a las pretensiones de condena relativa a este punto, se hace indispensable revisar el contenido de tales dictámenes y de los cuales se puede advertir lo siguiente:

- En el primero de ellos, elaborado por COLPENSIONES el 4 de octubre de 2014, se estableció una pérdida de capacidad laboral de origen común de 20.45%, con fecha de estructuración del 25 de septiembre de 2014 por el diagnóstico de *trastorno degenerativo de disco vertebral* (Páginas 28 a 30 expediente digital).
- En un segundo dictamen, emitido por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA el 24 de junio de 2015 con ocasión del recurso presentado por el demandante respecto del anterior, se mantuvo la fecha de estructuración y el origen común de la enfermedad, aunque se aumentó el porcentaje a 21.40%, definiendo como deficiencia la denominada *Lumbalgia crónica- Trastorno de discos* (Páginas 31 a 38).
- La anterior decisión fue apelada y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, a través de dictamen emitido el 28 de enero de 2016, la única modificación que tuvo fue aumentar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral a 23.90% (P. 39 a 46).

A propósito de la controversia generada en el presente caso, esta Sala considera pertinente puntualizar y recordar que, conforme a los artículos 11 inciso 2º y 40 del decreto reglamentario 2463 de 2001, es posible que los dictámenes de las juntas puedan ser controvertidos ante la jurisdicción ordinaria en lo laboral, los cuales incluso pueden ser desvirtuados con la aportación de otros medios de prueba, correspondiéndole al juez evaluar y establecer la realidad de cada situación.

Lo anterior se complementa con lo establecido en el decreto 1352 de 2013, el cual, de manera específica, dispone en su artículo 44 lo siguiente: *"Las controversias que se susciten en relación con los dictámenes emitidos en firme por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente"*.

En otras palabras, los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras no son prueba solemne o incontestable, no son definitivos ni inmutables, no atan de ninguna manera al Juez y no tienen carácter absoluto o vinculante de forma tal que no permita apartarse de lo que en ellos se dice, pues se trata de un acto sometido a control jurisdiccional.

Así lo ha considerado además la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 19 de octubre de 2006, rad. 29.622, en la que se reitera lo dicho en providencia del 13 de septiembre de 2006, rad. 29.328 y cuyo criterio ha sido acogido más adelante en providencias como la 31.062 del 18 de marzo de 2009, la 53986 del 4 de noviembre de 2015, la SL 1044 del 20 de marzo de 2019, rad. 68074, o más recientemente la SL 2349 del 28 de abril de 2021, rad. 83859 a cuyo texto se remite la Sala.

Es con base en esa situación se solicitó con la demanda la realización de una nueva valoración, la que fue ordenada en primera instancia a cargo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la cual arrojó los siguientes resultados según dictamen del 5 de octubre de 2020: i) se estableció una pérdida de capacidad laboral de 22.55%; ii) se definió como fecha de estructuración el 11 de julio de 2014; iii) se determinó que la enfermedad es de origen común; y iv) se registró como diagnóstico *Discopatía degenerativa de columna lumbar*.

3.- Origen de la enfermedad y prestaciones a cargo de POSITIVA S.A. y/o de la señora ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ

Bien se sabe que el origen de la invalidez es el que determina cuál es la entidad competente para resolver y reconocer la pensión o prestación que por esta contingencia se causa; así, será de origen común aquella enfermedad que no tenga su causa en un infortunio laboral del asegurado en el desarrollo de su actividad profesional, es decir, cuando ella no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador.

En el presente caso, todas las entidades encargadas de calificar al demandante han concluido que la enfermedad que padece es de origen NO profesional. Y a la misma conclusión llegó la Facultad Nacional de Salud Pública a través del dictamen del 5 de octubre de 2020 decretado como prueba por la Jueza de Primera Instancia dentro del presente proceso atendiendo a la solicitud que en tal sentido se había presentado con la demanda.

De manera particular, en este último dictamen se indicó frente al origen de la enfermedad, que *“Después de revisado el historial, se encuentra que los hallazgos en la Resonancia Magnética Nuclear del 24/03/2012, muestra signos de patología degenerativa crónica de*

columna, que no se encuentra que tenga nexos causales con el evento presentado". Más adelante afirma se dice sobre ese mismo aspecto que "Nuestros resultados sugieren que la prevalencia de degeneración discal y el número de niveles se incrementa conforme a la edad".

Si bien los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez no son definitivos y como tales pueden ser controvertidos e incluso desvirtuado con la aportación de otros medios de prueba, resulta que en este caso esos otros medios de prueba reiteran lo expresado en aquel dictamen inicial no quedando otro camino que acoger lo que en ellos se dispone y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto ABSOLVIÓ a POSITIVA S.A. y a la señora ÁNGELA MARÍA RESTREPO DÍAZ de cualquier prestación derivada de la patología que padece el demandante.

4.- Pensión de invalidez a cargo de COLPENSIONES.

Para acceder al derecho a una pensión de invalidez, bien sea de origen laboral o común, el afiliado debe acreditar los requisitos consagrados en los arts. 38 y 39 de la Ley 100/93 (este último modificado por el art. 1º de la Ley 860/03) los cuales indican que tiene derecho a tal prestación quien, básicamente, sufra una pérdida de capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, igual o superior al 50%, además de que cumpla con otras condiciones relacionados con el número mínimo de semanas cotizadas al sistema.

En el presente caso, no existe en el plenario ningún documento que permita considerar al demandante LUÍS ALCIDES AGUINAGA ZAPATA como una persona inválida desde el punto de vista médico-legal, pues los diferentes dictámenes que han sido realizados (4 en total), dan cuenta de una merma importante en su capacidad laboral, ciertamente, pero en todo caso inferior al 50% que establece la ley como parámetro mínimo.

En esas condiciones, si luego de 4 dictámenes de las entidades que por ley están llamadas a realizar la valoración, las cuales han sido adelantadas con fundamento en criterios clínicos y científicos, no se ha considerado que el porcentaje alcance el 50% para así poderlo declarar como una persona legalmente invalida, mal haría el Juez en hacerlo al no contar con los conocimientos médicos que para tal efecto se requieren.

Ello además porque el demandante ha tenido la oportunidad de controvertir todos los dictámenes que han sido emitidos, iniciando por el de COLPENSIONES, luego del cual el paciente fue remitido a la Junta Regional para la respectiva valoración y cuyo dictamen fue apelado hasta llegar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Dictamen que por su parte aparece controvertido en el presente proceso con la realización de uno nuevo por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.

Así las cosas, no existe posibilidad alguna para que sea reconocida la pensión de invalidez que se reclama a cargo de COLPENSIONES, motivo por el cual se confirmará la decisión en este puntual aspecto.

5.- Dotación de calzado y vestido de labor.

Los pronunciamientos judiciales al respecto, desde la sentencia radicada al número 10.400 del 22 de abril de 1998, han sido pacíficos en sostener que su reconocimiento se justifica sólo en la medida en que el asalariado los utilice en la ejecución de su trabajo, perdiendo todo sentido cuando se reclama después de extinguida la relación laboral, y que si lo que se pretende es una indemnización, los perjuicios deben demostrarse. Así lo ha indicado igualmente en recientes pronunciamientos como la sentencia SL 5754 del 7 de mayo de 2014, rad. 44057 o la SL 1639 del 11 de mayo de 2022, rad. 85577 en la que sostuvo:

“Aun cuando el artículo 230 del CST contempla la obligación de los empleadores de suministrar cada cuatro meses, calzado y vestido de labor a los trabajadores que perciban hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, su compensación en dinero está prohibida por el precepto 234 del mismo estatuto; en esa medida, lo que procede en los eventos del incumplimiento de esa obligación por parte de las empresas, es la solicitud de una indemnización de perjuicios, pero para su imposición, a la parte actora le corresponde la carga de la prueba de acreditar que efectivamente se causaron dichos perjuicios.”

Así, cuando lo que se reclama es una indemnización por perjuicios por la no entrega de la dotación legalmente establecida, esa indemnización no opera automáticamente, sino que deben demostrarse cuáles fueron esos perjuicios sufridos, entonces, al no haber ninguna prueba al respecto tal y como lo dedujo la *a quo*, en este punto, como en los demás, también se confirmará la decisión.

Sin costas en esta instancia, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en el cual se conoce.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 14 de septiembre de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **391519b2bdf0678bed124f890f7d67aed74e8e5fc25eea5d62ca77f4f7ee6a50**

Documento generado en 04/08/2022 01:54:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>